

Lima, 11 de enero del 2007

## **LA NUEVA ADMINISTRACION APRISTA**

*Pilar Arroyo R.P.  
Instituto Bartolomé Las Casas*

A casi seis meses de entrada en funciones es posible señalar algunos rasgos de este gobierno:

### **1.- Se está forjando una alianza en el poder muy parecida a la que nos gobernó en la década de los noventa.**

Recordemos que cuando Fujimori asumió el gobierno, rápidamente se constituyó alrededor de él una sólida alianza que le dio la estabilidad política y la fuerza para poder llevar a cabo sus objetivos. Fujimori tenía el respaldo de los empresarios (nacionales y extranjeros), de los organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo), de la tecnocracia formada en las canteras neoliberales, de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), de los medios de comunicación, la opinión pública, y un sector de la Iglesia ligada al Opus Dei. También gozó, casi hasta el final de su gobierno, del respaldo del gobierno norteamericano.

En estos meses García se ha ganado el favor de los empresarios (92% apoya su gestión, según encuesta de la Universidad de Lima) al darle continuidad a la política económica, dejando de lado su oferta de “cambio responsable”. Aunque es pronto para afirmarlo con rotundidad, pareciera haber olvidado lo que quedó claro en el proceso electoral presidencial: la necesidad de la entrada en agenda del tema crecimiento con redistribución y, por lo tanto, la urgencia de impulsar un conjunto de reformas para que los beneficios del progreso económico lleguen a todos los peruanos. Por otro lado, tanto a nivel ministerial como en puestos claves del gobierno destacan tecnócratas de orientación neoliberal, como en el Banco Central de Reserva (BCR)

La mayoría de medios de comunicación, luego de la primera vuelta electoral, han cerrado filas a su favor y su cobertura es sumamente complaciente con el gobierno.

La presencia en la primera vice-presidencia del Almirante Giampietri y su tácito respaldo a sus posiciones (la última de las cuales ha sido atacar a la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), la defensa de los uniformados enjuiciados por presuntas violaciones a los derechos humanos, su respaldo a la visión que las FF.AA. tienen sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y sus cuestionamientos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sumadas a su ofrecimiento de restituir el Servicio Militar

Obligatorio y de proporcionar recursos a las FF.AA. para potenciar su capacidad defensiva, también le han granjeado la simpatía de este sector.

La presencia de Rafael Rey en el Ministerio de la Producción y las coincidencias con Monseñor Cipriani para atacar a la CVR hacen ver que los lazos con el Opus Dei son también muy activos.

Su impulso al Tratado de Libre Comercio (TLC) con los EE.UU. (rompiendo una de sus tantas promesas electorales) (1), su alineamiento con la política exterior norteamericana en lo concerniente a la seguridad regional (recordemos su crítica al “fundamentalismo andino”) y la política antidrogas, le ha granjeado la simpatía de Bush.

Tal vez el eslabón más débil sea la Opinión Pública, aunque a diciembre contaba, según Apoyo, con el 52% de respaldo de la misma. Sin embargo, la tendencia es a la baja, de allí sus propuestas que buscan empatar con ella, como la pena de muerte y otras por el estilo.

## **2) Al igual que Fujimori Alan García inicia su gobierno teniendo a su favor la ausencia de oposición política.**

Tanto Unidad Nacional, como los Nacionalistas no están cumpliendo ese rol. En el caso de los primeros, el haber asumido su misma visión sobre lo que hay que hacer en el terreno económico le ha permitido a García atraer a los empresarios y a los tecnócratas que respaldaban esta opción, así como también a prominentes miembros del Partido Popular Cristiano (PPC). Antero Flores Araoz, ha sido nombrado Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el caso de los segundos, la incapacidad de Ollanta Humala para erigirse en el líder de la oposición; las pugnas y divisiones internas que se produjeron luego de la segunda vuelta electoral; el rompimiento de la alianza con UPP; y su reciente derrota en las elecciones regionales y municipales de noviembre lo han dejado, por ahora, fuera de juego.

La única oposición podría venir desde la sociedad civil. Alan lo sabe bien y visionariamente, en alianza con el fujimorismo en el Congreso, ha tratado de debilitar a la espina dorsal de la misma: las organizaciones no gubernamentales (ONGs), buscando desacreditarlas ante la opinión pública (ganan mucho, hacen lo que quieren etc.), controlar los fondos que reciben y determinar las prioridades de sus proyectos. Las leyes aprobadas al respecto han sido cuestionadas por ir contra los derechos que garantiza la Constitución,

---

<sup>1</sup> ) En esto resultó “más papista que el papa” pues hasta el mismísimo Pascual Lamy, Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), señala que los “acuerdos bilaterales (...) no proveen protección adecuada a las economías vulnerables, como sí lo hacen los tratados multilaterales entre varios países” en *La República* del 23 de noviembre del 2006.

estando pendiente una Acción de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

### 3) **Asoman preocupantes estilos autoritarios de gobernar.**

En estos meses, reiteradamente, se han presentado preocupantes señales que avizoran un estilo autoritario de gobernar:

a) la propuesta de pena de muerte para violadores de niños y terroristas (esta última mandada al archivo por el pleno del Congreso el 10 de enero);

b) los ataques a la Defensora del Pueblo por expresar posiciones discrepantes con el Ejecutivo en temas como la pena de muerte; por reclamar que también se dé asesoría legal a los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos y no sólo a los militares acusados de dichas violaciones; por su toma de posición a favor de los nativos Ashuar en el conflicto con la petrolera PlusPetrol etc, por su cuestionamiento a la ley anti-ONGs, por sostener la inocencia de los campesinos de Chacas, acusados injustamente de haber participado en la emboscada policial en diciembre del 2006 etc.

c) la campaña de desprestigio contra las Organizaciones no Gubernamentales y el intento de control de las mismas por parte de la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional).

d) la forma como se ha respondido frente al fallo de la CIDH sobre el caso de los 41 senderistas ejecutados en el penal Castro Castro en 1992, olvidándose de la sustancia del asunto: la responsabilidad del gobierno de Fujimori en dichas ejecuciones extrajudiciales y centrándose en un punto secundario . Coincidimos con Javier Valle Riestra cuando señala que las indemnizaciones económicas deben ser cumplidas pues “evidentemente hubo asesinatos totalmente arbitrarios” pero el homenaje público puede ser omitido <sup>(2)</sup>.

e) El sobredimensionamiento de los temas relacionados con el terrorismo para desviar la atención pública de temas sustanciales. Con el agravante de que para ello se involucra a gente inocente, como son los casos de los campesinos de Chacas y de los estudiantes limeños que fueron acusados de planear un atentado contra el presidente. En el caso de los primeros el alcalde de Chacas, Nilcasio Ñauca, sostuvo, “que los militares que participaron en la detención de los ocho campesinos los obligaron a firmar una declaración en castellano a pesar de que ellos eran quechuahablantes” <sup>(3)</sup>. Es decir, poco parece haberse aprendido al respecto, pues se siguen usando los mismos métodos que han sido condenados en el Informe de la CVR.

---

<sup>2</sup> ) Desco, Resumen Semanal Año XXIX - 1416, (27 de diciembre del 2006 - 2 de enero 2007)

<sup>3</sup> ) Desco, *art.cit.*

#### **4) No parece haber interés por hacer cambios sustanciales en el modelo económico**

Desde diversos sectores se señala esta necesidad:

+ Augusto Alvarez Rodrich, director del diario Perú 21 habla del “consenso logrado, al menos en el nivel del debate público, sobre lo inviable que es un esquema económico cuyos beneficios no incluyan a las mayorías (...) el paradigma vigente en los años noventa en el Perú, en el sentido de esperar a que “el crecimiento chorree” ha caducado” (4)

+ Humberto Campodónico hace ver que “las actuales tasas de crecimiento del IND {Ingreso Nacional Disponible} y del PBI {Producto Bruto Interno} dependen de la coyuntura excepcional de altos precios de los minerales. Si ésta cambiara, nuestras tasas de crecimiento estarían en niveles modestos. Es algo que debemos tener muy en cuenta para dejar de lado las poses “triumfalistas” y modificar este patrón de crecimiento que se apoya en las exportaciones y precios de materias primas” (5)

+ P. Francke y J. Iguñiz, en su interesante trabajo sobre la necesidad de un crecimiento pro-pobre también son de la misma opinión. “La estrategia de crecimiento pro-pobre propone (...) utilizar las divisas generadas en el sector de alta productividad {es decir, minería, telecomunicaciones, energía} (...) en el sector en que la productividad es más baja {es decir, en el sector agrario, comercio y servicios personales}. Ello implica reorganizar la tributación y orientar el uso de estos recursos a la inversión en capital humano; y finalmente, desarrollar el mercado interno como espacio inmediato de crecimiento de las PYME y como generador de empleo formal.

En ese sentido los autores señalan que su propuesta “tiene un fuerte componente distributivo” para lo cual proponen “tomar en serio la Política de Estado del Acuerdo Nacional consistente en elevar la recaudación a no menos del 18% del PIB”. Y agregan que “En una estructura económica tan desigual en productividades como la peruana, la lucha contra la pobreza se tiene que basar en la afirmación de derechos económicos y sociales que no pueden obtenerse de manera completa desde la propia actividad productiva (6).

Nada de esto parece estar siendo tomado en cuenta por el gobierno actual. Para muestra un botón: el cambio de su promesa de poner un impuesto a las sobre-ganancias mineras por un aporte voluntario de las mismas. Como

---

<sup>4</sup>) Editorial del 6 de diciembre del 2006 “Por un Nuevo Contrato Social”

<sup>5</sup>

) “Crecimiento del PBI: no todo lo que brilla es oro”, *La República* 29 de diciembre del 2006.

<sup>6</sup>) *Crecimiento Pro-Pobre en el Perú* p.8-9. Para una visión resumida ver *Crecimiento con Inclusión en el Perú. Documento de Trabajo* (Lima, CIES-PUC-CALANDRIA, 2006).

sabemos, dicho “óbolo” (llamado Programa Minero de Solidaridad con el Perú) ha sido fijado por las mineras en S/. 500 millones anuales, aproximadamente el 3% de sus utilidades netas del 2006, que ascendieron a la fabulosa suma 16,944 millones de soles.

Jürgen Schuldt señala que la base del cálculo para determinar este aporte se ha hecho de una forma tan favorable para los mineros (calculando un promedio de precio tan alto), que no sería raro que ni siquiera se llegara a cumplir con dicho aporte en los años siguientes, pues el “D.S. mencionado permite algunos descuentos de ese monto e, incluso, posibilita su eliminación total si la cotización internacional del o de los principales metales que explota cada una de las mineras se encuentra por debajo de un determinado ‘precio de referencia’” (7).

La cosa es más grave aún, pues según un estudio realizado por el Grupo Propuesta Ciudadana “el monto de las regalías mineras no pagadas por las empresas protegidas por los contratos de estabilidad jurídica es del orden de los US\$ 140 millones, es decir, aproximadamente S/. 460 millones. Esto nos hace pensar que, en los hechos el aporte voluntario no sería más que la regularización del pago de las regalías mineras con otra denominación” (8).

Por ello, coincidimos con Campodónico cuando señala que “El resultado es que a diferencia de países de la región como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela, que han optado claramente por la utilización de los recursos naturales para financiar su desarrollo, aquí nos hemos quedado con un ínfimo óbolo y sin impuesto a las sobreganancias mineras, pues fue archivado en el Congreso” (9)

## **5) Algunos signos alentadores**

Si bien el panorama general no da para mucho optimismo, alienta ver que al interior del gobierno y del Partido Aprista hay sectores que:

+ impulsan un manejo prudente de la alta conflictividad social que nos caracteriza. Según reportes de la Defensoría del Pueblo a fines de diciembre habían en el territorio nacional 97 conflictos, de los cuales 40% eran con autoridades locales, 21% tenían que ver con temas ambientales y 18% con disputas entre comunidades. Del total de conflictos 72% se dan en zonas rurales y 86% del total en zonas de pobreza (10).

---

<sup>7</sup> ) “La peculiar solidaridad minera” en “La República” / Actualidad económica (7 de enero de 2006)

<sup>8</sup> ) Nota Informativa de Participa Perú.

<sup>9</sup> ) “El óbolo minero: otro retroceso”, *La República* 24 de diciembre del 2006

<sup>10</sup> ) Defensoría el Pueblo. Reporte n. 34 “Conflictos sociales conocidos por la Defensoría del Pueblo al 31 de diciembre del 2006.

+ tienden puentes con la comunidad de derechos humanos, como es el caso del Premier Jorge del Castillo, quien es, a su vez, Secretario General colegiado del Partido Aprista.

+ impulsan el proceso de descentralización (regionalización del país), acelerando la transferencia de funciones y competencias a los gobiernos regionales, así como también fortaleciendo sus capacidades.

+ buscan ejercer un mayor control sobre el transporte interprovincial, con el programa “tolerancia cero”, supervisando el cumplimiento de las normas de tránsito para reducir las numerosas pérdidas de vidas humanas que ocasionan los frecuentes accidentes en nuestras carreteras

+ han decidido asumir como política de estado el Proyecto Educativo Nacional, preparado por el Consejo Nacional de Educación, respaldado por el Acuerdo nacional, y apoyado por numerosos sectores de la sociedad civil.

+ insisten en la necesidad de reformar el Poder Judicial, buscando dar celeridad al mismo, acabar con la corrupción en su interior y evitar los abusos de las acciones de amparo (caso discotecas, tragamonedas), etc

+ están interesados en el desarrollo de la Sierra, impulsando el programa Sierra Exportadora. Coincidimos con la Revista Agraria del Centro Peruano de Estudios Sociales cuando dice que el “mérito principal de la propuesta aprista es que expresa la idea de que la sierra rural –o parte de ella- es “viable”, lo que va a contrapelo de toda la clase política, que siempre ha supuesto lo contrario, sobre la base de argumentos que mezclan las reales dificultades geográficas, climáticas y la atomización de la propiedad, con profundos prejuicios étnicos y racistas” Sin embargo, señala que se requiere de “un gran esfuerzo de inversión en bienes públicos –red vial, telecomunicaciones, información, energía, educación, extensión técnica- carente de lo cual la producción no podrá ser competitiva”<sup>(11)</sup>

Ello nos hace ver que el perfil del nuevo gobierno todavía no está totalmente definido y que es importante buscar incidir en la definición del mismo.

---

<sup>11</sup> ) Editorial “Sierra exportadora”, que no se quede en utopía. *La Revista Agraria*, n. 76